

La consulta plantea si al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, las entidades de telecomunicaciones pueden ceder periódicamente a las entidades de crédito, una relación de las bajas telefónicas que se han producido, por causas distintas a la portabilidad.

En primer lugar es preciso indicar que la remisión de toda esa documentación, supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como "toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado",

Con carácter general, la cesión o comunicación de datos de carácter personal viene regulada en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica al establecer que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado."

No obstante, el artículo 11.2 dispone que "El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
- d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el

Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”

Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar, la comunicación de los números de teléfono, requerirá el consentimiento de los interesados a menos que la misma pueda ampararse en alguno de los supuestos excepcionados por el citado artículo 11.2, y ninguno de los cuales parece concurrir en el supuesto contemplado, por lo que la cesión, sin dicho previo consentimiento, sería contraria a la Ley 15/1999.

La entidad consultante, fundamenta la cesión en un pronunciamiento judicial (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 14 de mayo de 2009), dictado en un supuesto concreto, que en ningún caso resulta extrapolable al planteado en la consulta, pues la actualización de datos otorgada a través de un familiar de modo espontáneo, no es equiparable a la comunicación periódica obligatoria de las entidades de telefonía a otro tipo de entidades.

Por todo ello, podemos concluir que es cierto que toda entidad tiene la obligación de mantener los datos de carácter personal actualizados, pero esa obligación que tiene la entidad, no puede generar a su vez, otra obligación a otro tipo de entidades, como es la que se quiere imponer a las entidades de



telefonía, de comunicar periódicamente una relación de números de teléfonos que se hayan dado de baja. A mayor abundamiento dicha cesión no resultaría amparada en ningún apartado del artículo 11.2 de la Ley Orgánica requiriéndose en todo caso el consentimiento del afectado.